

Que las razones que existen para que los negocios en que el Juez propietario y los suplentes estuvieren impedidos de conocer se pasen al Juez de Distrito mas inmediato, obran igualmente en el caso de no estar completo el número de jueces que corresponden al Juzgado, por cuyo motivo es inadmisibile la distincion que propone la parte de D. Carlos Hangk, para fundar la incompetencia del Juez de Distrito de Querétaro, manifestando que si bien el conocimiento del negocio cuando estan impedidos el propietario y suplentes por recusacion ó excusa, toca al Juez federal mas inmediato, no procede lo mismo cuando estan vacantes las suplencias del Juzgado.

Por estas consideraciones, y con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, revisando se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Querétaro en 5 del próximo pasado Marzo, por la que se declaró competente para conocer del recurso de amparo promovido por D. Carlos Hangk, contra los procedimientos del C. Magistrado del Tribunal Superior de Guanajuato, Lic. Pedro Delgado.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Ndiera.*—*Ignacio Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Mayo 21 de 1874.—*Enrique Landa.*

COMISO.

Juicio seguido en el Juzgado de Distrito de Campeche, sobre comiso de varios envíetes de pólvora aprehendidos en la casa habitacion de D. Joaquín Rico.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Campeche, Octubre 16 de 1871.—Visto este juicio con todas sus constancias, de comiso de varios envíetes de pólvora aprehendidos en la casa habitacion del C. Joaquín Rico, y entre sus constancias, las declaraciones de Domingo Aldana, Sotero Tur, Rico y los carreteros que acarrearon la pólvora; lo alegado por el C. Promotor fiscal y el abogado de Izaguirre, y los demas que aparecen dueños de la pólvora decomisada, en el juicio verbal celebrado el día 20 del pasado; las pruebas promovidas por el abogado de los reputados como dueños, y la citación para sentencia.

Considerando: que de autos consta, que la canoa el "Toro" de la propiedad de Domingo Aldana, fué de su orden el pasado mes, á buscar á su rancho Jovonché, sesenta barriles de pólvora que dias antes habian trasladado sus mozos á aquel parage, por haberla encontrado segun declara Aldana, á la entrada de la boca del caño á barlovento de esta costa.

Que contra estos hechos que demuestran que en el presente caso ha habido una introduccion clandestina que debe comprenderse en la fraccion 2ª artículo 23 de la ordenanza general de aduanas, nada han alegado los presuntos dueños, pues las excepciones alegados por el defensor han perdido toda su fuerza con las declaraciones de los CC Vista de esta Aduana y oficial 2º de la Tesorería general de este Estado, quedando probado de ese modo, que la pólvora de que se trata, no ha tenido procedencia legal, y que la de que ha hecho referencia el abogado de los dueños ha correspondido á otra factura introducida legalmente y en

época muy anterior á la en que fué desembarcada en el rancho de Aldana, cuya pólvora es objeto del presente juicio; que esto está comprobado por la declaracion de D. Sotero Tur que no puede decirse que ha rectificado, pues que en ella se encerró en una completa negativa, y despues se ha referido á la pólvora introducida legalmente, y por los documentos que corren de fojas 10 á 11 del expediente en que consta que los quintales de pólvora introducidos de Tabasco por el "Vivi" en este puerto, fueron 18 y no 20 como se ha querido asegurar.

Que tambien está probado en autos que la embarcacion de Aldana, nombrada el "Toro," fué la que condujo á las playas de este puerto la pólvora en cuestion; y que así mismo lo está que los carreteros Negron y Segovia, trasladaron en sus carretas la pólvora á la casa de Rico; con cuanto mas considerar y ver convino, con fundamento de la fraccion 2ª artículo 23, y la 3ª artículo 26 de la ordenanza general de aduanas, se declara:

Primero: Los sesenta cuñetes de pólvora aprehendidos tanto en la casa de Rico como en las casas de las otras personas que compraron los cuñetes que de los sesenta habia vendido D. Pedro Izaguirre, han caido en la pena de comiso.

Segundo: la canoa el "Toro" y las carretas y bestias de Negron y Segovia, han caido tambien en la misma pena.

Tercero: Los Sres. D. Pablo Llovera, D. Joaquin Gafa y la Sra. viuda de Merodio, quedan obligados á devolver la pólvora comprada, ó á satisfacer su valor, con sus derechos á salvo para repetir contra el vendedor, lo que hayan pagado por la pólvora que compraron.

Cuarto: Para proceder al remate de los efectos caidos en comiso, se nombrarán peritos avaluadores que deberá proponer el C. Fiscal, y cuyos peritos procederán al avalúo de acuerdo con el Vistá de la Aduana marítima de este puerto.

Quinto y último: Notifíquese, y hecho el

avalúo, sáquese copia certificada de todo este expediente y remítase al Tribunal Superior de Circuito para su correspondiente revision.

Así lo proveyó y firmó el C. Juez de Distrito, Lic. Pedro Montalvo, por ante mí el escribano. Doy fé.—*Pedro Montalvo.*—*Antonio Carenzo.*

*Pedimento del C. Promotor fiscal
del Tribunal de Circuito.*

C. Magistrado.

Las constancias consignadas en las diligencias del procedimiento criminal que inició el C. Juez de Distrito de Campeche con motivo de la importacion clandestina de unos barriles de pólvora y de las cuales mandó compulsar testimonio de lo conducente para seguir el juicio de comiso á que corresponden estos autos, han venido á comprobar la justicia del fallo definitivo, pronunciado en él, y la necesidad de que se adicione, previniendo expresamente continúe por cuerda separada la causa respectiva para aplicar la pena corporal que haya lugar á los reos ó cómplices del contrabando cometido.

El representante de los responsables que interpusieron el recurso de apelacion contra dicho fallo, ha tratado de demostrar ante esta Superioridad, que los sesenta barriles de pólvora que constituyen la materia del juicio, pertenecen á los veinte quintales que de ese mismo artículo introdujo legalmente por el mismo puerto de campeche D. Sotero Tur algunos meses antes de la aprehension de la que ha sido decomisada; pero son tan forzadas las razones en que se apoya esta demostracion y las que con el propio objeto se adujeron en 1ª instancia, que el sentido comun y con mayor fundamento el criterio judicial se resisten á aceptarlas mas que como sofismas inventados para suplir la ausencia de toda prueba legítima de cualquiera dato razonable que pudiera apoyar la defensa. Y esto es tan cierto, que la única prueba promovida para acreditar que

la pólvora importada por Tur, es la misma aprehendida, resultó contraproducente por haber aparecido inconformes las guías sacadas de Tabasco y Laguna con las de los barriles desembarcados de retorno de aquellas procedencias.

Pero aun suponiendo que esta pólvora sea la que introdujo Tur procedente de Belice, y que por invendible en Campeche, primer puerto de desembarque en que pagó sus derechos, la haya trasladado á Tabasco, y que por invendible también allí y en la Laguna la hubiese regresado íntegra otra vez á Campeche en donde toda la vendió, cuando todavía estaba en el muelle, al C. Pedro Izaguirre, cosa que no está justificada de modo alguno como habría sido muy fácil con el libro respectivo de la casa de comercio de que es dependiente el supuesto comprador, no consta absolutamente que sea la misma que fué aprehendida en casa del C. Joaquín Rico; mientras que por el contrario, está plenamente probado, que los cuarenta y ocho barriles que en ella fueron capturados y los doce mas que ya habían sido vendidos á diferentes personas, forman un total de sesenta barriles que son los que fueron encontrados en la boca del caño, es decir, en un lugar desierto de la costa de Barlovento del puerto de Campeche, trasladados al rancho Jovonché de la propiedad de Domingo Allana, quien la transportó en su canoa el "Toro" á las playas de San Francisco, suburbio de dicha Ciudad, en donde fué desembarcada clandestinamente un domingo á las diez de la noche, y recibida por el celador José Angel Martínez, de acuerdo con el patron de la falúa Pedro Cordero y boga Antonio Conic, trasladándola en seguida á casa de Antonio Negron, por medio de su propia carreta, y luego mas tarde, á la del expresado Rico en la cual se conservó oculta en una pieza interior y dividida en fracciones de tres barriles envueltos en costales, así como fueron desembarcados con el doble objeto de facilitar los transportes y hacer mejor la ocultacion de dichos barriles.

El trayecto pues, que estos recorrieron desde su aparicion en la boca del caño, hasta su paradero en el lugar de la aprehension, está seguido paso á paso y comprobado con todos los conductores.

De manera que no hay la menor duda de su identidad, y no debe haberla, por consiguiente, en declarar que la introduccion de esos sesenta barriles de pólvora, habiendo sido fraudulenta y clandestina, pues que se verificó primero en un punto desierto de la costa, y luego en el barrio de San Francisco, no habilitado para el comercio extranjero, está comprendida en el caso 1º de contrabando y no en el 2º del artículo 23 de la Ordenanza de aduanas, en que el inferior funda la sentencia apelada.

En consecuencia, el fiscal pide á V. que la confirme, en la parte en que dá por incurso en la pena de comiso los referidos sesenta barriles de pólvora, la expresada canoa transportadora, denominada el "Toro," y la carreta de Antonio Calderon que sirvió para trasladarla de noche desde el punto en que fué desembarcada á su casa, no creyendo el fiscal que sea justo aplicar á Tomas Segovia la misma pena de comiso respecto de su carreta, por no estar probado evidentemente que haya servido para otra traslacion que la que se hizo de día de casa de Negron á la de Rico, sin mas precaucion que la de la envoltura en costales, que habiendo podido tomarse para evitar el peligro de explosion que por su naturaleza ofrece aquel material, bien pudo haber ignorado Segovia que tuviese una procedencia ilícita.

Y por cuanto aparecen gravemente comprometidos en el contrabando de que se trata, los CC. José Angel Martínez, Pedro Cordero y Antonio Conic empleados del resguardo de la Aduana marítima de Campeche, el fiscal pide también que V. mande suspenderlos inmediatamente del ejercicio de sus respectivos empleos, mientras en la causa criminal que debe seguirse por cuerda separada para aplicar la pena corporal correspondiente á los culpables del indicado

delito, y que el infrascripto es de opinion que V. expresamente debe en su sentencia definitiva mandar que se siga, se resuelve finalmente acerca de su permanencia ó separacion absoluta de ellos.

Otrosí dice el fiscal: que recusa á V. con la promesa de la ley, y sin menoscabar por esto el justo concepto de imparcialidad y justificacion que ha merecido V. del infrascripto por todos sus actos judiciales.

Mérida, 26 de Febrero de 1872.—*Prudencio Higueros.*

Es copia. Mérida, Marzo 11 de 1872.—*Prudencio Higueros.*

Sentencia del Tribunal de Circuito.

En la Ciudad de Mérida á los veintinueve dias del mes de Febrero de mil ochocientos setenta y dos años, el C. Lic. Sebastian Rubio primer Magistrado suplente, conociendo de estos autos desde el veintisiete del presente mes, por recusacion admitida por el propietario, cuyos autos fueron seguidos en el Juzgado de Distrito del Estado de Campeche desde el trece de Setiembre del año próximo pasado, en averiguacion de un contrabando de pólvora introducido en las playas del barrio de San Francisco de Campeche la noche del diez del propio mes y año. Vistas las diligencias practicadas en procedimiento criminal que fueron pedidas por el C. Magistrado propietario en auto de veintinueve de Diciembre del año próximo pasado, así como las que se practicaron para la celebracion del juicio de comiso. Vista la sentencia que pronunció el Juzgado de Distrito el diez y seis de Octubre del propio año, en que condena á la pena de comiso los sesenta cuñetes de pólvora aprehendidos, la canoa el "Toro," y los dos carros en que se dice verificada la importacion. Vistos: la expresion de agravios de los apelantes y el pedimento del C. Fiscal, presentados en esta superioridad en vir-

tud de la apelacion concedida contra aquella sentencia.

Considerando: que la causa instruida contra los empleados del resguardo de la Aduana marítima de Campeche, CC. José A. Martínez, Antonio Conic y Pedro Cordero y los CC. Antonio Negron, Joaquín Rico y Domingo Aldana, representa el crimen de fraude por la connivencia de aquellos empleados; el de contrabando, por la importacion clandestina, y el de robo, porque hallados los cuñetes de pólvora en las playas de la costa, debieron poner este hecho en conocimiento de la autoridad para su aplicacion, conforme á las leyes.

Considerando: que el Juzgado de Distrito ha proveído el auto de segura prision respecto de los referidos encausados, omitiendo consignar la suspension de los empleados Martínez, Conic y Cordero y determinar la parte de sueldo que debieran disfrutar hasta su vinlicacion en definitiva.

Considerando: que el propio C. Juez de Distrito, al proceder á los cateos practicados, no hizo constar las formalidades que en cada actuacion expresa que tuvieran lugar.

Considerando: que la aprehension de los cuñetes de pólvora en casa del C. Joaquín Rico, ha sido reclamada, alegando en ellos derecho de propiedad D. Sotero Tur, cuya propiedad no ha podido ser identificada con los barriles embargados y cuya falta de identificacion impide que se aprecien todas las operaciones aduanales con que ha aparejado su derecho deducido.

Considerando: que aun cuando se estimasen aquellos papeles que obran en contradiccion de las declaraciones recibidas al mismo D. Sotero Tur, estas pruebas no excluyen la fuerza de las que se produjeron para consignar la importacion clandestina, probándose en este caso que el C. Joaquín Rico admitió en su casa ambas negociaciones y produciendo esta conducta obligaciones distintas para con el repetido Sr. Tur y para con los que le encargaron el contrabando, siendo mucho mas evidente este con-

cepto legal, cuanto que aparece que en la primera declaración del C. Joaquín Rico, fojas 4, confesó la receptación del contrabando sin exponer cosa alguna, como debía, si aquella pólvora fuese la que vino después, añadiendo que era del C. Sotero Tur.

Considerando: que el C. Juez de Distrito omitió desde el instante de la aprehensión, poner al citado Rico en prisión incomunicada, como lo había hecho respecto de los otros encausados que no confesaban como él su connivencia con el celador Martínez.

Considerando por último: que respecto del C. Tomás Segobia, no aparece justificado que con su carro haya procedido á la importación clandestina. Con cuanto mas ver y considerar convino, el C. Magistrado funcionario dijo: que por sus propios fundamentos legales, y por los expuestos por el C. Promotor fiscal, debía confirmar como desde luego confirma la sentencia que pronunció el día diez y seis de Octubre del año próximo pasado el C. Juez de Distrito de Campeche, menos en la parte que declara decomisado el carro y bestia de la propiedad del C. Tomás Segobia, mandando se devuelvan al inferior los autos de juicio criminal que remitió, con inserción del pedimento fiscal y este fallo para que proceda de entera conformidad, haciéndole advertir las omisiones que quedan ya indicadas como perjudiciales á la eficacia del procedimiento judicial y al cumplimiento de su deber. Hágase saber y elévense estos autos con atento oficio á la Suprema Corte de Justicia para su revisión.

Y por este que el C. Magistrado suplente primero en ejercicio en este juicio, proveyó, definitivamente juzgando, así lo mandó y firmó de que doy fé.—*Lic. Sebastian Ilubio.—Mauricio Tejero.*

Pedimento del C. Procurador general de la Nación.

El Fiscal en calidad de Procurador general de la Nación dice: que por el Juzgado de Distrito del Estado de Campeche, se siguió el presente juicio sobre comiso de varios cuñetes de pólvora, aprehendidos en la casa habitación de D. Joaquín Rico. Puestas las diligencias en estado de sentencia, el expresado Juez con fecha 16 de Octubre del año próximo pasado, falló:

Primero: Los sesenta cuñetes de pólvora aprehendidos tanto en la casa de Rico como en las casas de otras personas que compraron los cuñetes que de los sesenta había vendido D. Pedro Izaguirre, han caído en la pena de comiso.

Segundo: La canoa el Toro y las carretas y bestias de Negrón y Segovia, han caído también en la misma pena.

Tercero: Los Sres. D. Pablo Llovera, D. Joaquín Gafa y la Sra. viuda de Merodio, quedan obligados á devolver la pólvora comprada ó á satisfacer su valor, con sus derechos á salvo para repetir contra el vendedor lo que hayan pagado por la pólvora que compraron.

Cuarto: Para proceder al remate de los efectos caídos en comiso, se nombrarán peritos avaluadores, que deberá proponer el C. Fiscal, y cuyos peritos procederan al valor, de acuerdo con el vista de la Aduana marítima de este puerto.

Notificados de ese auto los interesados, apelaron de él D. Sotero Tur y D. José Zamora. Admitido el recurso, se sustanció la 2ª instancia. En ella, el Tribunal de Circuito de Mérida por su sentencia de 29 de Febrero de 1872, declaró de conformidad con su Promotor fiscal: debía confirmar como desde luego confirmó, la sentencia que pronunció el 16 de Octubre del año próximo pasado el C. Juez de Distrito de Campeche, menos en la parte que declara decomisado el carro y bestias de la propiedad del C. Tomás Segobia, mandando se devuelvan

Suprema Corte de Justicia

al inferior los autos del juicio criminal, que remitió con inserción del pedimento fiscal y este fallo para que proceda de entera conformidad, haciéndole advertir las omisiones que quedan ya indicadas como perjudiciales á la eficacia del procedimiento judicial, y el cumplimiento de su deber.

Cuando se les hizo saber este fallo á los encausados, el Lic. D. Juan José Herrera, como apoderado de D. Sotero Tur, D. José Zamora y D. Tomas Segovia suplicó de él, cuyo recurso no fué admitido, atento el interés material del pleito. Contra esa determinación se opuso el recurso de denegada súplica y los recados de la ley fueron expedidos, señalando á la parte promoviente el término de 30 días.

Llegado á esta Suprema Corte el expediente, porque fué emitido por el Tribunal de Circuito, los promoventes no se han presentado y sin embargo se ha pasado y con mucho el plazo que les fué fijado, y dentro del cual debieron acudir segun lo prescribe la ley de 18 de Mayo de 1840, por aquellas palabras de "presentándose el interesado en tiempo y forma." Este no se ha presentado, luego es lo mismo que si no hubiera interpuesto recurso alguno, y esa Sala se halla en el caso de declarar desierto el recurso, y por ello dar por revisado este proceso, en cuanto á la parte en que la sentencia de vista confirmó la de 2ª instancia, y confirmarla en cuanto á lo demás.

México, Febrero 18 de 1874.—*Altamirano.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril 21 de 1874.—Vistos los presentes autos seguidos en el Juzgado de Distrito de Campeche, sobre comiso de varios cuñetes de pólvora, aprehendidos en la casa habitación de D. Joaquín Rico. Vista la sentencia de 1ª instancia fecha 16 de Octubre del año de 1871, la que pronun-

ció el Tribunal de Circuito de Yucatán en 29 de Febrero de 1872 declarando, que debía confirmar y confirmaba, la sentencia que pronunció el 16 de Octubre citado el Juez de Distrito de Campeche, menos en la parte que declara decomisado el carro y bestia de la propiedad del C. Tomas Segovia, mandando se devuelvan al inferior los autos del juicio criminal que remitió, con inserción del pedimento fiscal y este fallo para que proceda de entera conformidad, haciéndole advertir las omisiones que quedan ya indicadas, como perjudiciales á la eficacia del procedimiento judicial, y al cumplimiento de su deber. Visto lo pedido ante esta 1ª Sala por el Sr. Procurador general interino, con todo lo demás que de autos consta y se tuvo presente.

Considerando: Que aunque los encausados D. Sotero Tur, D. José Zamora y D. Tomas Segovia, interpusieron el recurso de denegada súplica, contra el fallo de 2ª instancia, este recurso no fué mejorado ni seguido ante esta 1ª Sala, habiéndose pasado y con mucho el término que el Tribunal de Circuito les señaló para presentarse ante esta Suprema Corte, como debieron haberlo hecho en cumplimiento de lo que dispone la ley reglamentaria de esa clase de recursos.

Que por lo mismo, es de declararse desierta la expresada súplica, y este Tribunal debe proceder á fallar el negocio, como si tal recurso no se hubiera intentado.

Que de autos resulta plenamente justificada la introducción fraudulenta de los sesenta barriles de pólvora aprehendidos á D. Joaquín Rico.

Que esa introducción se hizo en la canoa transportadora nombrada el Toro, y en la carreta de Antonio Calderon; cuyos vehículos deben caer en la pena de comiso atento el art. 23 de la ordenanza de Aduanas.

Que respecto de la carreta de Tomas Segovia no puede decirse lo mismo, porque no consta de autos que este tuviera conocimiento del fraude que se trataba de cometer.

Que de las constancias del expediente, resulta tambien dudosa la conducta de los empleados del resguardo de la Aduana marítima de Campeche, José Angel Martínez, Pedro Cordero y Antonio Conde, y por lo mismo se hallan en el caso de depurarla en el juicio respectivo, cuyo juicio se ha mandado abrir en la sentencia de vista; de conformidad con lo pedido por el Sr. Fiscal, como Procurador general, y por los propios legales fundamentos en que se apoya la sentencia de 2ª instancia, se declara:

1ª: se da por revisada esta sentencia, en la parte que confirma la pronunciada por el Juzgado de Distrito de Campeche, en 16 de Octubre del año próximo pasado, que falló en lo conducente: 1ª: Los sesenta cuñetes de pólvora aprehendidos tanto en casa de Rico, como en la de las otras personas que compraron los cuñetes que de los sesenta había vendido D. Pedro Izaguirre, han caído en la pena de comiso. 2ª La caña, el Toro y las carretas y bestias de Negron y Segovia, han caído tambien en la misma pena. 3ª: Los Sres. D. Pablo Olvera, D. Joaquín Gafa y la Sra. viuda de Merodio, quedando obligados á devolver la pólvora comprada ó á satisfacer su valor, con sus derechos á salvo, para repetir contra el vendedor lo que hayan pagado por la pólvora que compraron.

2ª: se confirma la presente sentencia del Tribunal de Circuito de Yucatán tanto en la parte que revoca la de su inferior, en lo relativo al carro y bestia de la propiedad de Tomas Segovia, como en lo restante que contiene sobre enjuiciamiento de los empleados del resguardo de la Aduana marítima de Campeche, y su respectiva suspension.

Devuélvanse las actuaciones al Tribunal de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los Sres. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexica-

nos y firmaron.—José María Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan S. de la Garea.—Simón Guzman.—M. Zavala.—Enrique Landa, secretario.

Es copia. México, Junio 6 de 1874.—Alejo Gomez Eguarte, oficial segundo..

COMPETENCIA

Suscitada entre el Juzgado de Distrito de Veracruz y el de 1ª instancia de Huatusco, para conocer del juicio promovido por la importacion fraudulenta de un bulto de ropa aprehendido á D. Alfredo Bastide.

Pedimento del C. Fiscal de la Suprema Corte de Justicia.

El Fiscal dice: que en el mes de Setiembre de 1872, se presentaron ante el Juez sustituto de 1ª instancia de Huatusco los CC. Basualde por una parte, como administrador de rentas de dicha Villa, y Alfredo Bastide por la otra, á fin de celebrar un juicio verbal sobre la introduccion clandestina de un bulto de ropa, y el que fué aprehendido por el celador Fernando Espejo.

Entre las razones que para excepcionarse alegó Bastide, fué que ese tercio de ropa que le aprehendieron pagó todos sus derechos en la Administracion de rentas de Córdoba, á cuyo fin pidió se librara el correspondiente exhorto para dejar justificado ese hecho, así como tambien aseguró, que á su internacion por Veracruz satisficieron todos los derechos que correspondian. Mas como quiera que antes la Aduana de Huatusco había comunicado el hecho á la general del Estado de Veracruz, esta pasó el asunto al Juez de Distrito, el cual de conformidad con lo pedido por el Promotor fiscal, entabló competencia para conocer del comiso en cuestion, al Juzgado de 1ª instancia de Huatusco.

Practicadas las correspondientes diligen-